

Copie



Año 2014-20 años de la autonomía del
Ministerio Público de la Nación

Ministerio Público de la Defensa

CONTESTO VISTA

Señor Juez Federal N° 3:

María Mercedes Crespi, Defensora Pública Oficial, con domicilio en mi público despacho, en estos autos **"CRUZ, SILVIA MARCELA Y OTROS C/ MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA DE LA NACION S/AMPARO AMBIENTAL"** (EXPTE. N° FCB 21076/2016), ante Ud. comparezco y digo:

I. OBJETO: Concurro en la oportunidad contestando la vista en la presente causa, particularmente respecto del informe del artículo 8 presentado por la tercera citada en la causa, la empresa Porta Hermanos SA, toda vez que ya hiciera lo propio respecto de la demandada, el Estado Nacional.

II. POSTURA DE LA EMPRESA PORTA SA:

Tal como se desprende de las presentaciones de la empresa, su postura gira alrededor de las siguientes afirmaciones: A) La vía intentada es inadmisibile ya que no se dan los supuestos del artículo 2 de la ley de amparo, la actora no probó la inexistencia de otras vías para su reclamo; B) La justicia federal es incompetente, la secretaría de energía de la nación no era la autoridad de aplicación del caso ya que la producción de Porta SA se encuentra regulada por el INV y, por lo tanto, el caso corresponde a la competencia provincial no delegada al Estado Nacional; C) Tampoco hay arbitrariedad o ilegalidad manifiesta; D) En forma subsidiaria respecto de su planteo principal acerca de la vía y la competencia, alega en resumidas cuentas que la planta cuestionada no fabrica biocombustible tal como la actora afirma y que, por lo tanto, no requiere la habilitación de la secretaría de Energía de la Nación, indicando que sus habilitaciones se encuentran en forma. E) Por otra parte, indicar que el

USO OFICIAL

"Estudio de Impacto Ambiental" sólo se encuentra previsto para actividades que puedan degradar el ambiente de modo "significativo", con lo cual esta planta estaba exenta de esta clase de estudio; F) Asimismo, descalifican la prueba presentada por la actora por ser antigua en relación con los estándares de producción actuales de la planta y carentes de rigor científico.

III. ACERCA DE LA VÍA INTENTADA Y

LA COMPETENCIA: Respecto de estos argumentos, entiende que los mismos deben ser rechazados, ello en virtud de que todo ello ha sido valorado ya por la Cámara Federal del Fuero, la que concluye de un modo contrario a las pretensiones de la empresa; con lo cual la discusión al respecto se torna estéril.

Efectivamente, la Cámara Federal de Córdoba con fecha 12.9.16 le otorgó al presente proceso ciertos caracteres, imprimiéndole entonces una dirección muy concreta para orientar la actividad jurisdiccional del juez de primera instancia (véase incluso que hasta apartó al juez que había actuado en primer término en virtud de esa decisión sobre el cauce del proceso).

Así, tenemos que, en relación con la competencia el Tribunal de Alzada afirmó que *"...si bien es cierto que de conformidad al artículo 7 de la Ley General de Ambiente N° 25.675 se establece la competencia federal para cuestiones ambientales inter jurisdiccionales (cosa que no ocurre en la especie toda vez que en principio la problemática ambiental denunciada no excede los límites locales), no menos cierto es que el referido artículo 7mo. en su primer párrafo no excluye la apreciación de la competencia en razón de la materia o de las personas. En tal sentido y de acuerdo a los términos de la demanda, se desprende que se ha denunciado una violación a la Ley N° 26.093 denominada "Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Usos Sustentables de Biocombustibles" y su Decreto reglamentario N° 109/2007, normativa esta de carácter federal, lo que suscita la competencia federal en razón de la materia, de conformidad al artículo 116 de la C.N. y art. 2º, inciso 1ro., de la Ley 48. Igualmente tampoco se debe soslayar que aquí se encuentra demandado el Estado Nacional (Ministerio de Energía y Minería de la Nación), Secretaría de Recursos Hidrocarburos (ex Secretaría de Energía de la Nación), que en función del artículo 2 del Dto. 109/2007 resulta ser la autoridad*



Ministerio Público de la Defensa

de aplicación del régimen legal de los Biocombustibles, como también que el objeto de este amparo ambiental tiende a hacer cesar la contaminación ambiental atmosférica denunciada como producida por la Planta de Bioetanol emplazada en el predio de la Empresa Forta Hnos. S.A. ubicada en calle Camino a San Antonio Km. 4 ½ de esta ciudad, y se proceda a la clausura y cierre definitivo de la misma por carecer de habilitación legal y no haber concluido con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Asimismo, la presente causa suscita la competencia federal en razón de las personas de conformidad al artículo 2º, inciso 6to., de la Ley 48 y art. 116 de la C.N.”.

En segundo término, la Cámara también establece el carácter de amparo ambiental en los términos de los artículos 41 y 43, 2do párrafo de la Constitución Nacional, citando específicamente la Ley General del Ambiente nro. 25.675 y recordando que “Esta ley instauro lo que se ha denominado la “acción de amparo ambiental” (art. 30), reconociendo legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, al afectado, al Defensor del Pueblo y a las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo 43 de la Constitución Nacional, y al Estado nacional, provincial o municipal; y para la acción de recomposición o de indemnización pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso ocurrido en su jurisdicción. Asimismo, sin perjuicio de lo indicado precedentemente, toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo. Además, el juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos a fin de proteger efectivamente el interés general y se le otorga la potestad de decretar de oficio o a pedido de parte medidas de urgencia en cualquier estado del proceso (Art. 32). Y, en cuanto al instituto de la cosa juzgada se regula su nuevo alcance con

efectos "erga omnes", salvo que la acción se rechace por cuestiones probatorias (Art. 33). Como puede observarse, la legislación ha dotado a esta acción de amparo especial, de características propias que importan un apartamiento de las reglas clásicas del amparo "común" regulado por la ley 16.986. Reflejo de ello, y en relación al tema que nos ocupa es el rol del juez que pasa a ser ciertamente activo por las amplias potestades que posee en materia de producción y diligenciamiento de pruebas, como se ha reseñado anteriormente."

Todo esto responde las quejas de la empresa citada como tercera al proceso en relación a lo que resumió como argumentos A), B) y C).

IV. ACERCA DE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR LA EMPRESA EN FORMA SUBSIDIARIA:

La pretensión: Más allá del contenido expreso de la demanda y de la opinión de los jueces de la Cámara Federal ya transcrita en el presente escrito, fue el propio juez quien en el decreto de fecha 26.4.17 estableció que si bien, lo que aquí se discute es si la empresa tiene las habilitaciones correspondientes y si cumplió con el estudio previo de impacto ambiental, los amparistas han puesto de manifiesto el carácter contaminante requiriendo la adopción de medidas necesarias para su neutralización, así como también el problema de los riesgos de la producción y almacenamiento en una zona densamente poblada, del alcohol etílico frente a riesgo de explosión.

Es decir que la pretensión es clara en cuanto a establecer que es lo que la planta cuestionada produce -más allá de lo que la propia empresa diga- y, asimismo, el análisis colateral de las condiciones en las que desarrolla su actividad en relación con la salud de los vecinos y con los riesgos de incendio y explosión.

Conforme las consideraciones de hecho y de derecho que expondré a continuación, veremos entonces que corresponderá al menos investigar todas estas cuestiones en el marco del presente amparo, a fin de llevar tranquilidad y certeza a los niños que viven en las zonas aledañas a la planta respecto de cómo es el ambiente en el que se desarrollan, ya que el mismo debe ser sano, por imperio legal (art. 24.2.c Convención de los Derechos del Niño, 41 Constitución Nacional y artículo 21 de la ley 26061)



Ministerio Público de la Defensa

Derecho aplicable: A partir de la reforma constitucional de 1994 contamos con disposiciones específicas en la materia. El art. 41 de la C.N. constituye una cláusula tuitiva genérica reconociendo a todos los habitantes el derecho esencial a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, esta norma alcanza tanto la faz individual como la colectiva.

La obligación de preservar el ambiente recae tanto sobre el poder público como sobre los particulares, sean individuos o personas jurídicas.

Asimismo, la Constitución atribuye al Congreso nacional la sanción de la llamada legislación común (art. 75 inc. 12° C.N.), correspondiendo a las provincias la aplicación de la misma por sus tribunales y el dictado de normas procesales. En consecuencia, el art. 41 C.N. señala que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental, y a las provincias, las necesarias para complementirlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.

La relación entre el derecho al medio ambiente sano y el ejercicio de los demás derechos humanos es innegable, ya que uno es presupuesto del disfrute de los demás. Así lo estableció la Corte IDH *"Esta Corte recuerda que existe una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos"*¹. Asimismo, la CADH incorpora estas ideas en el Protocolo en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adicional al Pacto de San José de Costa Rica, atendiendo a la progresividad en la protección de los derechos humanos, se incluyen los llamados derechos de solidaridad, entre ellos, el derecho a la salud, a la alimentación y a un medio ambiente sano *"11.1. Toda persona tiene derecho a*

¹ Casos "Comunidad mayagna (sumo) y las tingüi vs. Nicaragua", sentencia de 31 de agosto de 2001, párrs. 144, 149 y "Luna López vs. Honduras", sentencia de 19 de octubre de 2013, párrafo 123.

vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. 2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente".

En este marco se dictó la Ley General del Ambiente citada por la Cámara Federal, que sienta los presupuestos mínimos de protección del medio ambiente. Esta ley define el "daño ambiental" como "toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos" (art. 27).

También establece el derecho a la previa audiencia pública y la obligación de efectuar estudios de impacto ambiental, todo ello en miras a prevenir el daño, así, el artículo 11 de la LGA que dispone que "Toda obra o actividad que [...] sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución".

En éste breve repaso, finalmente cabe decir que la ley 25.675 establece también los principios preventivo y precautorio. En el caso del principio preventivo, el artículo 4º inciso tercero dispone que "Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir". En el caso del principio precautorio, el inciso cuarto señala que "Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente".

El caso traído a estudio en esta causa: Es importante concluir entonces, luego de una atenta lectura de la respuesta de la empresa Porta Hnos SA, que en el caso de autos hay:

- Una planta que lleva delante una actividad riesgosa con utilización de elementos contaminantes.



Ministerio Público de la Defensa

USO OFICIAL

- Un barrio alcaño a dicha planta cuyos habitantes ponen de manifiesto la existencia de diversos problemas de salud muy concretos que se extienden sin piedad a los niños del sector.

- Ausencia reconocida por la empresa de estudios de impacto ambiental y, además,

- Existencia de prueba contradictoria (note Sr. Juez respecto de la prueba que las pericias efectuadas en la causa penal en la justicia provincial tiene resultados controvertidos en relación a distintos aspectos puntuales, incluso a las unidades de medición utilizadas, lo cual llevó al juez de control provincial Dr. Lezcano a sugerir una aclaratoria respecto de estos puntos discutidos, a ello se suman informes médicos y químicos descalificados por la contraparte pero sin aportar contrapueba, informes de la Municipalidad que reconocen algunas deficiencias aunque en seguida aclaran que se van a tomar medidas para su solución, etc).

Este cuadro de situación amerita el avance del presente amparo, insisto, con la finalidad de aportar certeza a los habitantes del lugar, particularmente los niños, ya que su futuro podría verse comprometido.

En este contexto la empresa tiene que entender que, al llevar adelante una actividad riesgosa, tiene mayores deberes frente a la sociedad, al Estado y al medio ambiente, y que ello no implica ninguna clase de merescabo o descalificación hacia la trayectoria de la empresa ó hacia sus directivos², sino que simplemente tiene que ver con toda esta normativa superior citada, que apunta a resguardar al medio ambiente en cuanto ámbito de poblaciones actuales y futuras; al deber estatal de cuidar su espacio físico y a sus ciudadanos, porque el Estado argentino debe adoptar todas las medidas

² Aspecto éste que no ha sido considerado por el abogado de la empresa en alguna de sus presentaciones.

necesarias para proteger la salud de la población y del medio ambiente en la zona de influencia de la planta cuestionada.

En definitiva, la actividad riesgosa se está desarrollando sin estudios de impacto ambiental previo, sin participación ciudadana ya que no hubo audiencia pública previa; por lo tanto, toca al Poder Judicial ahora intentar enderezar esta situación para llevar certeza e información pública seria a la comunidad. No se me escapa a éste respecto que la Empresa ha aportado copiosa prueba sobre los controles que lleva a cabo periódicamente, el problema con ello es que estos controles son siempre llevados adelante por la propia empresa, sin control externo alguno y, si bien esta sola circunstancia no alcanza para dudar de la veracidad de la información, lo cierto que en la vereda de enfrente hay un grupo de niños y sus familias que dicen ser afectados por la actividad de la planta, con lo cual la tarea jurisdiccional debe estar encaminada necesariamente a abrir esta situación a la auditoria y control públicos (comprendiendo en éste último término tanto al Poder Judicial en su calidad de poder estatal como a la sociedad presuntamente afectada).

V. PETITORIO: Por todo lo expuesto SOLICITO:

- a) Tenga por contestada en legal tiempo y forma la vista conferida
- b) Oportunamente, disponga las medidas necesarias para esclarecer los hechos en la presente causa, remitiéndome a mis presentaciones anteriores en cuanto a las mismas (audiencia pública, intervención de peritos especializados de la UNC, UCC, UNL y UNLP, presentación de amicus curie, encuesta socio ambiental e inspección ocular, etc.).
- c) Mantengo reserva del caso federal ya efectuada con anterioridad.

Proveer de conformidad

MARÍA MERCEDES CRESPI
Defensora Pública Oficial

